

Rehacer ciudad. Identidades y ciudadanía en la Ciudad de México

*Jorge Brenna B.**

Introducción

Contrariamente a lo que se ha pretendido hacernos creer, la participación ciudadana ha sido siempre una asignatura pendiente en la metrópoli, puesto que el modelo corporativo implementado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –y que correspondía a la cultura política de la nación–, impidió toda participación que no estuviera mediatizada por el partido en el poder y sus gobiernos. La alternancia en la Ciudad de México no cambió mucho las cosas, antes bien, la revistió con un maquillaje populista, socializante y seudodemocrático que ha pervertido la participación ciudadana, volviéndola otra vez un nuevo instrumento de movilización de las masas en beneficio de intereses partidarios y proyectos políticos personales. El punto es que la imposibilidad de lograr una participación ciudadana¹ para deshacer los nudos de la política pública en la Ciudad de México, acarrea crecientes problemas de ingobernabilidad.

* Profesor-investigador. Departamento de Relaciones Sociales. UAM-Xochimilco.

¹ Entendemos el concepto de “participación ciudadana”, como todas aquellas acciones de involucramiento de la ciudadanía en las decisiones políticas que afectan a la comunidad, realizadas por medio de espacios y procesos públicos de codecisión.

En este artículo se pretende reflexionar en torno a la cuestión de las transformaciones que han ocurrido en las lealtades ciudadanas (nunca consolidadas) haciendo compleja y hasta difícil la participación ciudadana en la gestión de la Ciudad de México. Este problema está asociado a la crisis de la democracia liberal que no acierta a ventilar los conflictos de interés porque ya no son los únicos ni los más importantes. La diversidad de condiciones socioeconómicas, culturales, políticas, la multiplicación de las ofertas partidarias, así como el retorno a las identidades primordiales (a las que se regresa o bien de las que nunca se separó el habitante del DF), han generado una creciente dificultad para procesar los conflictos y subsanar los déficit de la gestión urbana por la vía de la participación de los ciudadanos en la resolución de los mismos.

¿Qué tipo de participación es la que ha operado en núcleos aislados de la ciudad en los que la comunidad –que no la ciudadanía– ha conseguido trascender los límites de los burocráticos planes y programas gubernamentales que nunca llegan a nada si no hay un incentivo económico o político? Las evidencias en la metrópoli mexicana muestran que las formas participativas en la ciudad no son ciudadanas sino comunitarias hasta en los sitios más típicamente urbanos y modernos (Roma, Condesa, San Ángel, Coapa, etc.). En otros espacios opera la *ley del más fuerte* (el que ostente más recursos de poder económico, político, capacidad de violencia, etc.), más que la fuerza de la ley, como *modus operandi* urbano para crear zonas de exclusión. ¿Alguien se atrevería a dudar de la feroz “solidaridad comunitaria” de los vecinos de Tepito o Iztapalapa en la Ciudad de México que hacen cuerpo en contra de la “Ley” –incluso para violarla–? ¿Alguien se atrevería a decir que la militarización de la seguridad vecinal de los residentes de Lomas de Chapultepec (y de muchas colonias clase medieras del sur de la ciudad) tiene algo que ver con una participación ciudadana?

En conclusión: las identidades ciudadanas no han operado ni funcionan actualmente. Las identidades comunitarias (locales), mientras tanto, han demostrado ser más funcionales a los tiempos de la diferenciación, de la segregación social y la crisis de la democracia liberal-nacional; éstas parecen ser los asideros más seguros para unos habitantes que desconfían de la autoridad: no tienen lealtades cívicas y, por ende, no creen en la voluntad de los políticos y del propio gobierno de la ciudad. La actual regla democrática que nutre a la ciudadanía es obsoleta, por ser heterónoma y universalista. La dinámica global-local afectó a las identidades y es un imperativo encontrar una norma que dé lugar a una nueva forma de participación (autónoma) de las identidades diversas, abocándose a crear reglas para la convivencia y la tolerancia recíproca activa.

Es urgente rehacer las identidades urbanas junto con la idea y la práctica de la democracia. Así, la gobernabilidad pasa a ser un asunto de identidades y libertades que

tienen que articularse a partir de una *reciprocidad pluralista* y no sobre la base de la reproducción de feudos monopartidistas, monoculturales, clientelismos, populismos, demagogia o en un culto a las mayorías segregadas a las que se les usa, pero jamás se les hace superar su condición de sobrevivientes de una política urbana seudodemocrática.

La ciudad del siglo XXI

Las ciudades latinoamericanas se caracterizan más que ninguna otra realidad urbana por una intensa polarización y desigualdad social, producto de un largo ciclo de inserción en las dinámicas de libre mercado que han prevalecido en los últimos 20 años y que acabaron deteriorando la centralidad estatal en la regulación de los sistemas económicos y, en especial, en el sistema de desarrollo urbano. Entre 1950 y 1990 se ha incrementado geométricamente la población concentrada en las ciudades de las regiones en vías de desarrollo desde los 286 hasta los 1 514 millones de habitantes (un aumento de 529%). Comparativamente, el crecimiento de la población urbana de los países desarrollados aumentó, para este mismo periodo, de los 448 a los 875 millones, respectivamente (195%). Esto habla del intenso proceso de urbanización que se viene experimentando en las ciudades del mundo en desarrollo, al que pertenece, entre las que se cuentan cuatro de las trece megaciudades mundiales, a saber: Buenos Aires, México DF, Río de Janeiro y Sao Paulo. Estos núcleos urbanos participan, voluntaria e involuntariamente, ya en el consabido proceso de globalización, como en el desarrollo de las megalópolis que suponen un doble proceso de *inclusión/exclusión*. Lo que produce valor y se articula a la dinámica mundial queda incorporado, mientras lo que es disfuncional a ésta es excluido a los márgenes del sistema mundial. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos de la evolución de las ciudades como sistemas urbanos? En principio, podemos hablar de un caótico proceso que conlleva a una polarización e intensificación –y extensión– de las desigualdades sociales, haciendo de estos sistemas urbanos *espacios de concentración de demandas sociales diversificadas y crecientes* que evolucionan hacia la desintegración social y, en ocasiones, a la ingobernabilidad de las ciudades. Así, las marcas características de los centros urbanos latinoamericanos “globalizados” acaban siendo la desigualdad social, la pobreza extrema y la marginación social, la violencia y la criminalidad, la proliferación del comercio informal y sus vínculos con actividades ilícitas (narcotráfico, contrabando, etc.), la inseguridad pública, cuya mancha se extiende a todos los ámbitos de la urbe, la corrupción policiaca y administrativa, la contaminación y una *fragmentación social*

cada vez más palpable que reproduce todo lo anterior.

La ciudad-archipiélago

En términos generales, se acepta que la ciudad, como sistema, nació de una concentración y una delimitación territorial hoy desarticulada. La utopía urbana que significó la ciudad occidental pensada como modelo de unidad, cohesión, consistencia y estética, estalló de pronto al finalizar el siglo XX, convirtiéndose en el espacio del desorden, cuyos fragmentos se desplazan caóticamente desbordando las fronteras urbanas en un movimiento que atomizó un espacio urbano mal vinculado por una ineficiente e ilógica red vial. La fragmentación social que padecen las ciudades del siglo XXI las hace aparecer como *un archipiélago* conformado por espacios disímiles, desarticulados y en conflicto, fragmentos de zonas que buscan diferenciarse unas de las otras y, al mismo tiempo, defenderse unas de otras contradiciendo la función tradicional de la ciudad armónica, unitaria y ordenada. La heterogeneidad compleja que caracteriza a la ciudad, la ha vuelto un fenómeno peculiar que mezcla culturas, identidades, prácticas sociales, y mundos de vida en los que cohabitan recelosamente la extrema pobreza con la alta concentración de la riqueza, los desarraigados urbanos, la desigualdad y la diferencia de oportunidades con los grupos humanos más opulentos.

Ha desaparecido la ciudad-centro, criterio de ordenación territorial (como *el lugar* de la ciudad –como la imagen de la ciudad–, como el ámbito de los poderes y del comercio especializado), lugar del espacio público por excelencia que hoy día desaparece perdiendo todo su significado y quedando reducido a un simple espacio de *tráfico* sin sentido ni otro propósito que no sea comercial o burocrático.

La ciudad multicultural

La ciudad del nuevo milenio concentra y expresa la diversidad del mundo, manifestando su conformación histórica a partir de una multiplicidad de etnias y culturas a pesar de la inercia homogeneizadora y controladora de los poderes urbanos que buscan a toda costa una normalización cultural y una pureza étnica (Borja, 1997). Nadie podría negar el racismo que prevalece en las ciudades, especialmente en las zonas residenciales y comerciales de alto consumo, donde los sujetos sufren una rigurosa inspección en un intento por excluir los signos de inferioridad social/racial de los espacios homogeneizados para los sectores pudientes: plazas comerciales, restaurantes, bares y discotecas en los cuales los clientes son rigurosamente filtrados con métodos que hubieran sido el orgullo de las SS del nazismo. Por otro lado, se encuentra el fenómeno segregatorio en el que cada grupo social (que es también étnico) tiende a utilizar su concentración en barrios como forma de protección, ayuda mutua y afirmación de

su especificidad (Bullard, 1994).

La crisis del espacio público en la ciudad

Las transformaciones de la ciudad son radicales: la cercanía experimentada en la ciudad tradicional en la que los contornos de la urbe definen un mundo cerrado y local, un espacio vital en el que todos se conocen y participan, en el que lo público (la ciudad como punto de encuentro, de comunicación y redistribución de signo igualitario) es llenado cotidianamente de valores sociales y culturales, características que han sido suplantadas por una *ciudad fragmentada*. Es el comienzo de la construcción de la *anticiudad*, que niega y vacía de todo contenido social, cultural y político los espacios públicos de la ciudad. Los habitantes de la anticiudad se repliegan cada vez más a los ámbitos privados, protegidos y restringidos: esto de arriba a abajo y de abajo para arriba. Lo anterior es visible en la evidencia de un proceso dual: la ciudad se *des-localiza* y se *des-socializa*.

La ciudad se des-localiza: su relación con el territorio pasa a un segundo término, se des-centraliza en términos simbólicos, pues el centro deja de ser el ombligo de la ciudad.

La ciudad se des-socializa: las formas de sociabilidad urbana se transforman en el sentido señalado; un repliegue en la privacidad básicamente (Lipovetsky; 1993:229).² Esta tendencia es tan aguda, que desemboca en la creación o recreación de comunidades que emulan “microsociedades” dentro de la ciudad, haciendo que proliferen una multiplicidad de centros particularizados, marcados por la nueva identidad del *gheto* que así se protege de “los otros”. El habitante de la ciudad crea, de este modo, nuevas identidades, más cerradas e intolerantes que la anterior que ha abandonado. Se privatiza el orden normativo puesto que cada microsociedad ha privatizado el espacio imponiendo sus propias reglas, creando su propio aparato de coerción (policía privada, sicarios, “madrinas”, etcétera).

El espacio público se empobrece como escenario sociocultural y el habitante de la ciudad es expulsado del centro.³ En tanto, la ciudad se vuelve cada vez más un complejo entramado urbano, un espeso tejido en el que subyacen una infinidad de núcleos comunitarios –periféricos– de población segregada y segregante sin referentes históricos ni memoria colectiva. Desaparecen los espacios públicos detrás de los que

² Dice Lipovetsky: “la ciudad tradicional dominada por el polo de lo público ha muerto” (1993:229).

³ Como ya se señaló, la pérdida de significado del “centro” lo ha reducido a ser un simple cauce del tránsito obligado de la producción y reproducción económica, estación y pasarela del desempleo y la mendicidad, centro de operaciones del sector informal y todos aquellos productos de la segregación urbana (como los niños de la calle, bandas de jóvenes, etc.). Hoy en día, el rescate del Centro Histórico que pretende hacer el populista gobierno del DF en alianza con el hombre más rico de México, Carlos Slim, más que devolverle su significado histórico al centro de la ciudad (y de la nación), consagra el vaciamiento de toda simbología (N. del A.).

había una historia y una tradición que los respaldaba.

La soledad y el desamparo de los habitantes de la ciudad son patentes en el asedio del que son objeto por las situaciones de riesgo que asolan las calles de la ciudad. Ésta es cada vez más toda ella una zona de alto riesgo: los hogares también. De ahí que la elección de permanecer en casa convierta a la ciudad en un conjunto de zonas-cárcel vigiladas y protegidas por entidades privadas; se vive bajo estado de amenaza permanente. Se cultiva entonces la desconfianza, se agudizan los sentidos y la atención para descifrar los signos de las conductas de “los otros” que nos sobresaltan.

Se ha terminado la era del *flanneur* ocioso –dice Monsiváis– que merodeaba por la ciudad curioseando sin sobresaltos y sin prisas. Y hoy le sustituye “la víctima en potencia” que se mueve sigilosamente por la ciudad; “como en una cárcel, divide sus rutas de conocimiento en visiones rápidas y medrosas y hace de la desconfianza su vislumbre sistemático y del recelo su bitácora” (Monsiváis, 1997). A la reducción del espacio público le corresponde también una transformación en un espacio de opresión que obliga a los habitantes a cambiar radicalmente los referentes de la cotidianidad para poder sobrevivir.

La fragmentación de la ciudad se reproduce por intercurso de la violencia y el repliegue a la privacidad (por miedo), partiendo el espacio urbano en “nuestra ciudad” y “la ciudad de los otros” en la que residen los extraños: nuestra amenaza cotidiana.⁴ A lo anterior se sumará como una marca urbana el aumento de los conflictos y el espectáculo de la pobreza (pedigüeños, limpia-parabrisas, tragafuegos, vendedores-de-todo en los cruceros de lenta circulación, etc.). El promiscuo maridaje entre el desempleo, la violencia, el vandalismo, la delincuencia, la corrupción policial y la impunidad, es el sello de nuestra ciudad, factores que, finalmente, son los que han ido llenando el espacio público, excluyendo a los habitantes que se refugian “desesperanzados” en el ámbito privado.

La inseguridad pública, al haberse enseñoreado de la ciudad y sus espacios centrales, ha puesto en evidencia, desafortunadamente, el derrumbe de la seguridad pública, el desmoronamiento de las capacidades del Estado para atender las demandas de los “ciudadanos”: una ingobernabilidad que se ha vuelto consustancial a la ciudad como un fenómeno permanente que desafía a la política y al análisis social de hoy.

Otro aspecto que ha venido a ocupar el espacio público, es la pobreza de las mayorías que deambulan por la ciudad en busca de algo o alguien que resuelva –al menos por hoy– sus inmensas necesidades materiales y sociales. Ante este panorama, el individuo busca ansiosamente la seguridad en espacios de pertenencia primordiales,

⁴ “La ciudad realmente habitada, para la mayoría de la población, se mide por el intervalo existente entre espacios de trabajo, la colonia donde radica y algunos escasos lugares públicos de esparcimiento; el resto son prolongaciones o extensiones, por lo general conocidas de oídas o por la televisión” (Piccini, 1996).

menos impersonales y anónimos, más creíbles que una autoridad que se desmorona día a día gestionando un espacio público cada vez más vacío y, por ende, cada vez más sujeto a un uso privado por parte de actores estatales (públicos) y subestatales (privados).

Las identidades urbanas que pretendían dar sustento a un comportamiento ciudadano, se desmoronan al tiempo que lo hace la legitimidad de los gobiernos, ya que han sido rebasados por los riesgos crecientes (y sus costos) que se adueñan de la ciudad. Se buscan desesperadamente identidades comunitarias (más pequeñas, pero más seguras) y generalmente se las encuentra en el ámbito del barrio –por el lado de los sectores populares– y en los nichos habitacionales de la anticuidad (unidades habitacionales, barrios residenciales cerrados, etc.) –por el lado de las clases medias y altas.

Paradójicamente, la búsqueda de estas identidades colectivas es para un uso individual que nada tiene que ver con valores cívicos, lealtades territoriales o nacionales, compromisos ciudadanos, solidaridad social, etcétera. No existen en ellas intenciones colectivistas: lo único que prevalece son intenciones privadas para *ciudadanos sin ciudad*. No existe más la idea de un espacio común en donde desenvolver la sociabilidad del ciudadano. Existe sólo la búsqueda de un espacio privado –seguro– en donde organizar y defender la privacidad (Sambricio, 1996).

Junto con el espacio público, pareciera haber muerto también la solidaridad y el bien común como valores cívicos de la ciudad. Y lo que queda del espacio y la vida pública urbanas siguen siendo, no obstante, escenarios del conflicto social en los que el ejercicio de la ciudadanía (icono lo que esto signifique aún!) tiene lugar más allá del pobre significado de una política que pretende mostrarse como democrática.

A la manera de Maffesoli, podría decirse que la ciudad del nuevo milenio es una explosión de *tribus efímeras* con símbolos y signos de pertenencia particulares (no universales). Tribus que han renunciado a su expresión en el espacio público movilizándose más en función de lo privado, negociando espacios entre ellos mismos, *con* y *contra* ellos mismos, confiando más en una reproducción de valores ofrecida por los medios de comunicación colectiva que en una reproducción mediante el espacio público en el que se encuentra la política. De ahí que la crisis de la ciudad sea, al mismo tiempo, del espacio público y de la política.

La desestructuración de la ciudad se encuentra detrás de la pérdida del sentido de pertenencia y de las ¿nuevas? formas de socialización que han surgido y resurgido. Y esta crisis de lo público se expresa en la ineficacia de la ciudad como proveedora de bienes y servicios públicos (educación, salud, trabajo, vivienda, transporte, cultura...). Junto a ello, se desdibuja también la imagen de la ciudadanía como identidad colectiva universal, afectando los nexos que aún quedan entre la sociedad y el Estado. Así, la ciudadanía que en nuestra ciudad siempre se ha significado por su precariedad, por su baja intensidad, se ve desbordada por el estallido de identidades locales, efímeras,

volubles, que dan vida a una nueva socialidad (no estatal, no pública, no universal) cada vez menos politizada, negando a su vez la democracia formal (representativa) en la que se le ha encerrado desde siempre.

Los partidos políticos, protagonistas centrales de la democracia representativa, de cuya crisis estamos hoy hablando, experimentan también una crisis de demanda y de oferta tan aguda, que expresan, precisamente, este estrechamiento del espacio público que ha hecho entrar en crisis a la política como espacio de diálogo y negociación de intereses. Su producto mayor, en tanto se ha vuelto un problema estructural, es la *ingobernabilidad* de las metrópolis. En otras palabras, las instituciones que hacen frente al crecimiento y multiplicación de las demandas de las tribus urbanas, han sido desbordadas con mucho. Y no parece haber una mínima correspondencia entre el crecimiento demográfico, el de las nuevas identidades y sus demandas, y el *cambio institucional*. Pero ¿hacia dónde apunta toda esta problemática? Hacia el asunto de la crisis de la democracia representativa y la necesidad de un fortalecimiento real de la democracia en el ámbito local. Una reestructuración de los mecanismos de gestión metropolitana resulta urgente como itinerario hacia la restitución de niveles mínimos de gobernabilidad sobre nuevas bases democráticas.

Desde el punto de vista de la crisis identitaria que se experimenta en la ciudad, lo anterior implica pensar en la necesidad de reconstruir liderazgos locales autónomos que se adapten a los nuevos problemas que implica la ciudad y sus espacios locales (Pérez, 1999). Las identidades comunitarias no son las antípodas de la ciudadanía, antes bien son la base ineludible e inevitable para poner en acción verdaderos mecanismos de participación ciudadana en tanto los ciudadanos necesitan sentirse arraigados en su entorno local antes de pensar en el bien común de la *res pública*. La integración ciudadana es más probable si los habitantes están insertos en grupos referenciales próximos. Sólo de esta manera el manejo de la pluralización dejará de ser un obstáculo para la gestión urbana.

Identidad y participación ciudadana

Actualmente estamos presenciando un fenómeno que si bien no es nuevo en el mundo, sí es peculiar en las ciudades latinoamericanas cuya democracia representativa dista mucho de haberse consolidado. Nos referimos a la creciente desconfianza hacia la política y los partidos políticos en general. En el fondo, estamos hablando de una grave crisis de confianza en las instituciones, en su legitimidad y sobre todo en el *modus operandi* de las políticas de gobierno.

Cada día es más evidente el alejamiento entre los representantes y los representados. El ritual electoral al que ha sido reducido el ciudadano, es visto por los habitantes de

la ciudad como algo vacío, sin legitimidad. La mercadotecnia de la que hacen gala los principales partidos en la ciudad (PAN, PRI, PRD, PVEM...) ha llegado a grados tales en su capacidad de dispendio y pobreza de contenidos en sus ofertas políticas, que el resultado es la enorme desconfianza y apatía expresadas en el abstencionismo de la última jornada electoral (59% el pasado 6 de julio de 2003). Por otro lado, el mimetismo entre partidos gobernantes e instituciones (PRI-Regencia de la ciudad en el pasado, PRD-Gobierno de la Ciudad de México hoy) es tal, que lo que el ciudadano llega a ver es simplemente el uso de los aparatos de partido para conseguir el poder a como dé lugar y utilizar a las instituciones de gobierno para reproducirlo y satisfacer intereses y proyectos privados. En el ámbito de las políticas públicas, las decisiones sobre problemas que afectan a la ciudadanía siempre son tomadas a sus espaldas, sacrificando toda posibilidad de ejercer una autonomía política en las delegaciones e instancias locales. Algunas de las competencias en cuanto a iniciativas políticas han quedado en manos de los asambleístas, quienes responden prioritariamente a intereses de partido y, según el caso, del gobernante en turno.

Por otra parte, la llamada *ciudadanización* de las políticas gubernamentales ha fabricado organismos (Consejos, Comités, etc.) *ex profeso* que no tienen más función que ser instancias testimoniales utilizadas para legitimar las políticas que han diseñado en conjunto los grupos económicos y el gobierno del DF. El producto de este modelo está a la vista: especulación pública con los espacios del Centro Histórico de la ciudad con el objeto de financiar el gasto del gobierno en obras de corto plazo y alto rendimiento electoral para el jefe de gobierno y su partido.

La participación ciudadana es pobre y no tiene función alguna más que legitimar las decisiones verticales de los gobiernos de la ciudad y las delegaciones políticas. Y el problema no es realmente la falta de participación ciudadana, sino su carencia de significado. La electoralización de las decisiones públicas subordina cualquier tipo de participación a la agenda electoral en la búsqueda de resultados urgentes susceptibles de ser convertidos en publicidad, en mercadotecnia política. Se presta atención únicamente a los costos-beneficios de corto plazo y no a los proyectos de impacto social de mediano y largo plazo.

Así, la deslegitimación de las políticas del gobierno del DF en los últimos seis años se debe más que nada a la falta de participación y a su distorsión corporativa. El uso verticalista, demagógico y populista del poder y su anquilosamiento en una política clientelar, ha propiciado el caos urbano que actualmente padecemos, caos que, paradójicamente, pudiera caracterizarse como un *autoritarismo sin autoridad*, una suerte de neopopulismo. Para decirlo de manera descarnada: movilización de las masas y las organizaciones sociales como sustituto de la verdadera participación ciudadana, demagogia como sustituto de la deliberación política abierta y transparente. La democracia en el DF está siendo asfixiada en las urnas y en la Asamblea Legislativa por

los autonómados “democratizadores”. La ciudad se está quedando sin ciudadanos y sin democracia.

Y es en este punto donde queremos referirnos al déficit de gobernabilidad como indicador de la crisis democrática y como evidencia de la inviabilidad de *la ciudad de la esperanza* sobre la base de estos déficit. Inclusive, si concebimos a la democracia meramente como un régimen de vigencia efectiva de los derechos civiles y las libertades individuales, la ingobernabilidad que cunde en la ciudad nos revela la inexistencia de tal régimen y la de un gobierno eficaz desde la perspectiva de los objetivos de la sociedad como comunidad política. Aunque quizás aquí sea pertinente preguntarse por la sociedad civil como tal: ¿en dónde está? ¿Dónde está el desarrollo económico y social de la ciudad en donde pueda asentarse una ciudadanía responsable de su papel en la cosa pública?

Recientemente se ha acuñado el concepto de *capital social*⁵ como uno de los factores centrales para hablar de sociedad organizada o sociedad civil y, consecuentemente, hablar de dinámicas democráticas. Uno de los aspectos que más ha puesto en riesgo a la democracia ha sido el fenómeno de la *inseguridad pública*, síntesis de todos los déficit sociales, económicos y políticos de la Ciudad de México (y del país). Tal parece que desde el inicio de los noventa se ha convertido en uno de los problemas más agudos que erosionan al “capital social”, incrementándose de manera sensible a pesar del manipuleo de las cifras por parte de las autoridades de la ciudad. Y si bien la inseguridad pública es ya un problema de dimensiones nacionales, se expresa de manera particular en la Ciudad de México. Su relevancia y trascendencia es obvia; sin embargo, es crucial para nosotros en tanto que pone en *jaque* permanentemente a la precaria democracia que se construye en el país. Su principal efecto –ya lo dijimos– se refleja en la crisis de la participación ciudadana como efecto, a su vez, de la descomposición de la ciudadanía, de su fragmentación, de su privatización. El de por sí bajo grado de asociacionismo cívico o la escasa formación de capital social se desploman en relación directamente proporcional al crecimiento de la inseguridad pública. Sus altos niveles y la impunidad que la viene acompañando desde hace décadas en nuestra ciudad, han llegado al punto de vulnerar seriamente la moral pública y el espacio público del que, a su vez, paulatinamente, ha sido exiliado el habitante

⁵ De circulación relativamente reciente en las ciencias sociales es el concepto de *capital social*, entendido como un conjunto de elementos que estimulan la cooperación espontánea entre los individuos, como la confianza y la reciprocidad, para realizar propósitos comunes. Estos elementos son fundamentales para que en una comunidad se generen amplias redes de asociaciones voluntarias con el consecuente aumento en la capacidad de la sociedad para autoorganizarse, desplegar acciones coordinadas y transmitir sus demandas al gobierno. Fue James S. Coleman el que primero le dio a esta categoría su sentido actual (1990:300-321). Robert D. Putnam (1993) y Francis Fukuyama (1995, 1999) lo han generalizado en varios trabajos. Su crítica ya ha dado frutos y puede ubicarse en Charles Boix y Daniel Posner (1996).

de la ciudad. La comunidad política asentada en la Ciudad de México se fragmenta velozmente recluyendo a los individuos en sus hogares, en sus nichos habitacionales, aislándolos del espacio público.

Los habitantes de la Ciudad de México han llegado al grado de tener una evidente desconfianza unos de los otros, lo cual es un verdadero obstáculo para la sociabilidad, el despliegue de la solidaridad social y el asociacionismo cívico. Como consecuencia de esto, se ha llegado al punto de no concebir intereses comunes, puesto que cada localidad del archipiélago urbano considera tener sus intereses particulares amenazados por los de "los otros" y los de la propia autoridad. El resultado de todo esto es una masa urbana amorfa que impide desde hace muchos años el surgimiento de la sociedad civil (y del capital social que la nutre).

La inseguridad pública es uno de los principales venenos para la democracia. La ausencia de una sociedad civil dinámica reproduce la fragmentación de los ciudadanos convertidos en individuos temerosos, desconfiados y recelosos respecto de todo lo que huelga a política y a políticos por impotencia, hartazgo, desencanto y desconfianza en las instituciones políticas de la ciudad.⁶

El caso es que como consecuencia de la ingobernabilidad que ha propiciado la inseguridad pública (sin ser el único factor), tenemos una situación de enorme desprestigio de la democracia representativa, cuando las promesas de los políticos para acabar con ésta son incumplidas y como una burla se nos presenta el hecho de que la delincuencia a gran escala continúa enseñoreándose de la ciudad. Un hondo sentimiento de frustración se ha apoderado de los habitantes de la Ciudad de México, la incertidumbre y el descontento han empezado a reproducir el fenómeno del *populismo* que fácilmente se desplaza hacia una versión *light*, decíamos, de autoritarismo sin autoridad. Todo ello da pie a la aparición de una variada suerte de demagogos oportunistas que empiezan a medrar con el descontento social, la incomodidad urbana (¿se podrá medir la esperanza de vida de los ciudadanos en número de viajes en microbús?) y la pobreza generalizada de los habitantes de la ciudad, instrumentalizándolas en apoyo de sus causas personales (aspiraciones presidenciales, etc.). Y mientras los políticos diseñan sus proyectos personales indiferentes al caos urbano y la disolución de la ciudad y la ciudadanía, la situación que se multiplica es la de los microenfrentamientos asociados a un aumento de la violencia cotidiana.

Consideraciones finales

⁶ Según las encuestas, apenas dos de cada diez habitantes del Distrito Federal tienen confianza en las autoridades policíacas. Véase la encuesta realizada por el diario *Reforma* (12/03/1999).

Cuando hablamos de *rehacer la ciudad*, nos estamos refiriendo, precisamente, a una operación quirúrgica que refunde la *polis* en la que la ciudadanía pueda tener lugar. En otras palabras, sin ciudad no hay ciudadanía ni política democrática, y lo que tenemos hoy es el cuerpo de la *anticiudad*. De ahí que su rehechura sea un imperativo junto a la construcción de una nueva cultura política y una nueva noción de democracia que, al mismo tiempo, reconstruyan al ciudadano desde sus espacios particulares en los que se ha replegado y sumido en la apatía política. Y para lograrlo no se trata de esperar un destello de voluntad política de parte de quienes regentean la política institucional en esta ciudad. La solución, por cierto, no proviene de los cielos, sino de la tierra.

La democracia tiene que dejar de ser un régimen de reglas creadas en la cúspide de un sistema político que ostenta serios déficit de legitimidad como para imponer una obediencia civil y una participación ciudadana limitada y limitante. La naturaleza *heterónoma* de la creación de las reglas democráticas ha de transmutarse en reglas democráticas *autónomas* elaboradas por la sociedad civil. Es urgente arrebatarse a la autoridad pública el control de los mecanismos participativos. Quien tiene que decidir cuándo y cómo participa la población de la Ciudad de México es la propia sociedad organizada y no los funcionarios del gobierno o los políticos profesionales de la industria electoral. Pues no es mediante el clientelismo y el intercambio de favores como va a dejar de crecer la ingobernabilidad de la ciudad ni es la forma como se va a restaurar la confianza en la autoridad pública. En la medida en que nos vamos topando con problemáticas nuevas (comenzando con la fragmentación social) se tiene que ir construyendo una cultura política nueva, con un discurso y una acción política que legitimen y den coherencia a gobiernos locales (gobiernos intermedios o *mezzo-gobiernos* dirá Víctor Pérez Díaz, 1987) y a un asociacionismo cívico arraigado en identidades locales y liderazgos autónomos que les correspondan desde abajo. No es una transmutación mágica como la que se pretendía en una vieja consigna comunista, “arriba los de abajo”, de resultados desafortunados. Es la puesta en práctica de un activismo político democrático que retoma para sí la iniciativa de crear cultura política, crear autónomamente las reglas democráticas para incentivar a los habitantes de la ciudad a tomar por asalto la ciudadanía como el momento fundacional de un verdadero acto de *hacer ciudad...* de hacer *la polis*.

Bibliografía

- Borja, Jordi y Manuel Castells (1997). “La ciudad multicultural”, Castells, Manuel, *Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información*, Taurus, Madrid.
- Boix, Charles y Daniel Posner (1996). *Making Social Capital Work: A Review of Robert Putnam’s Making Democracy Work*. The Weatherland Center for International Affairs,

- Harvard University Press, Cambridge, junio 1996, working papers, pp. 96-104.
- Coleman, James S. (1990). *Foundations of Social Theory*, Harvard University Press, Cambridge, pp. 300-321.
- Fukuyama, Francis (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, The Free Press, Nueva York.
- (1999). *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*, The Free Press, Nueva York.
- Lipovetsky, Gilles (1993). "Espacio privado y espacio público en la era posmoderna", *Sociológica*, núm. 22, mayo-agosto, UAM-Azcapotzalco, México, p. 229.
- Maffesoli, Michel (1990). *El tiempo de las tribus*, Icaria, Barcelona.
- Monsiváis, Carlos (1997). "No les des el gusto de que nomás te asesinen", *La Jornada Semanal*, 14 de diciembre, México.
- Pérez Díaz, Víctor (1987). *El retorno de la sociedad civil*, Instituto de Estudios Económicos, Madrid.
- Pérez Negrete, Margarita (1999). "Las ciudades latinoamericanas y el proceso de globalización", *Memoria*, núm. 127, México.
- Piccini, Mabel (1996). "Acerca de la comunicación en las grandes ciudades", *Perfiles latinoamericanos*, núm. 9, julio-diciembre.
- Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, Princeton.
- Reforma*, Sección A, México, 12 de marzo de 1999.
- Robert Bullard, Eugene Gribsby y Charles Lee (1994). *Residential apartheid: the American Legacy*, UCLA Center for Afro-American Studies, Los Ángeles.
- Sambricio, Carlos (1996). "De Metrópolis a *Blade Runner*", *Revista de occidente*, núm.